

*Ejecutoria de la Suprema Corte  
de Justicia.*

México, Diciembre 21 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, por José Alejandro García, contra los procedimientos del Lic. Catalá, que, en calidad de juez sustituto de primera instancia de Minatitlán, lo ha juzgado y sentenciado á diez años de presidio con retencion, por el delito de homicidio, sin embargo de no ser autoridad competente para ello, á causa de la nulidad de su eleccion para el expresado cargo, por no tener un año de residencia en Minatitlán en la época en que fué nombrado, por cuyo motivo juzga el quejoso que con tales procedimientos se ha vulnerado, en perjuicio suyo, la garantía que consigna el art. 16 de la Constitución federal.

Considerando: que no se ha justificado en estas actuaciones, que el vicio que se asegura existir en la eleccion del Lic. Catalá para juez de primera instancia importa, conforme á las leyes del Estado, la nulidad de la eleccion y de todos los actos de la persona en que hubieren recaído; y que esta nulidad se verifique en fuerza de la ley y sin necesidad de una declaracion especial dictada por autoridad competente.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta:

Que es de confirmarse, y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Veracruz en 3 de Noviembre del presente año, en la que declaró: que la justicia de la union no ampara ni protege al quejoso José Alejandro García, contra la sentencia que el juzgado de primera instancia de Minatitlán dictó contra él condenándolo á diez años de presidio con retencion, y cuya sentencia ha sido confirmada por la superioridad.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para

los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*M. Auza.*—*José Arceaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Ndjera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 18 de 1875.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por los Sres. Elorza y Mendía del comercio de Mazatlán, contra el administrador de la aduana de ese puerto, que se niega á recibirlos en moneda de cobre el pago de ciertos derechos.*

### PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez 2º suplente de Distrito.

El que suscribe llevando la voz fiscal por ausencia del promotor, emite el siguiente parecer.

Los Sres. Elorza y Mendía, intentando pagar con la antigua moneda que en cuartillas de cobre circulaba en el Estado, se resisten á pagar la cantidad de \$ 157 50 cs. con el recargo de \$ 19 44 cs. que ejecutivamente les ha cobrado la Aduana terrestre de este puerto, por el tercer tercio de contribuciones ordinarias de este año que di-

chos Señores adeudan por su jiro de abarotes; habiéndoles embargado treinta bultos de harina para seguridad de los derechos del fisco.

No queriendo admitirles dicha oficina esa moneda que ha dejado de circular, interponen el recurso de amparo, creyendo violadas en su persona las garantías que otorga el art. 27 de la Constitución política del país; y creen se invade la órbita de atribuciones de los Poderes de la Unión, supuesto que las leyes fecha 31 de Diciembre de 1872 y 14 de Abril de 1873, expedidas por la legislatura del Estado, mandan que las contribuciones del mismo sean pagadas en plata ó oro, con exclusion de la moneda de cobre, quitándole á ésta el valor que representaba y reduciéndola al del metal de que está formada, privando á los tenedores de ella de la diferencia entre ambos, sin previa indemnización.

La Aduana en su informe relativo de fojas 5, dice haber embargado, en efecto, la mercancía de que aquí se trata, con arreglo á la ley de 12 de Noviembre del año próximo pasado, para hacer efectivo el adeudo de los Sres. Elorza y Mendía; pero que hasta el día 15 no habían hecho citación para el remate, siendo por lo mismo extemporánea la solicitud de amparo, reclamando providencias que no había dictado, é inconducente la cita que hacen en su escrito de los arts. 5º y 6º de la ley de 20 de Enero de 1869, para apoyarla. Que si se niega á recibir en pago la moneda de cobre, se funda en la frac. 22 del art. 1º de la ley de ingresos del Estado, fecha 27 de Diciembre de 1873; pues en ella se previene, que las contribuciones sean satisfechas en moneda legal de plata ó oro; que al decretar los poderes del Estado esa medida, no se invade la facultad de que trata la frac. 23 del art. 72 de la Constitución general, siendo de todo punto imposible que se presente la ley ó decreto por el que se fijaron las condiciones que debía tener la moneda de cobre que se estuvo acuñando en el Estado,

por cuya causa nunca fue tenida sino como una moneda convencional entre los habitantes del mismo Estado, y puesta así en circulación como en diversas épocas y en distintos lugares circulan monedas muy provisionales: que en comprobación de ese hecho, puede citarse: primero, el que no llegó á ser admitida esa moneda de cobre en las oficinas de la federación; y segundo, que cayó en absoluto desmerito el día en que haciéndose sentir mucho la falsificación que se hacía de ella, el comercio de esta plaza se negó á recibirla, siendo inexacto el que las leyes del Estado fechas 31 de Diciembre de 1872 y 14 de Abril de 1873, fueran las que le quitaran su valor, supuesto que las leyes citadas tendían únicamente á impedir que el erario del propio Estado fuese el objeto de especulaciones poco escrupulosas.

El que lleva la voz fiscal se ha detenido en reproducir en su dictamen las razones expuestas por la Aduana terrestre, porque las juzga dignas de ser tomadas en consideración, y según lo ha manifestado en casos análogos, está conforme en lo general con ellas.

Sin embargo de lo manifestado, vuelve á tratar de nuevo la cuestión en el presente juicio, fijándola de un modo claro.

¿Al negarse las oficinas de hacienda á admitir la antigua moneda de cobre, se violan las garantías que otorga el art. 27 de la Constitución federal?

¿Las leyes de 31 de Diciembre de 1872 y 14 de Abril de 1873 expedidas por los poderes del Estado, han invadido las atribuciones que corresponden al Congreso general conforme á la frac. 23 del art. 72 de la misma Constitución política?

Estas dos cuestiones que no entrañan sino una sola, pueden plantearse de esta manera, aplicándolas al caso:

¿Al no admitir una oficina de hacienda la moneda de cobre, ocupa la propiedad de las personas?

¿Las leyes del Estado que mandan se reciban solo monedas de plata ú oro legales, han determinado la expropiacion de la moneda de cobre, sin indemnizacion previa, invadiendo las atribuciones del Congreso general?

Respecto de la 1ª una oficina que no admite en pago de derechos ó contribuciones una moneda ilegal, que carece de las condiciones indispensables, está en su perfecto derecho para no aceptarla, mas cuando sabe que el Congreso general ha consignado en las leyes de presupuestos de egresos, fechas 30 de Mayo de 1873 y 1874, una cantidad de \$ 50,000 para la amortizacion de esa moneda, mandada amortizar precisamente por no tener esas condiciones.

En cuanto á la 2ª, no puede ni suponerse que los pederes del Estado invadan las atribuciones del S. Poder legislativo, cuando este decreta la amortizacion de una moneda que no tiene el valor que realmente representara, sino un valor que no habia sido convencional entre el comercio y los consumidores.

Pues bien, si como he dicho en otro asunto semejante, el ejecutivo de la Union cumpliendo con las leyes, lleva amortizados ya \$ 128,329 3 cs. y en gran parte se ha indemnizado á los tenedores del cobre, ¿como pueden ser violadas las garantías individuales, no admitiéndose en las oficinas dicha moneda?

¿Que, acaso ha habido "expropiacion"?

Conforme al diccionario de la academia, esa palabra significa lo mismo que "despropiacion", esto es: pérdida de la propiedad de una cosa; y la accion de desapropiar, es hacer que una cosa propia de uno pase á ser propiedad de otro; y propiedad, con arreglo á derecho, es la facultad para gozar y disponer libremente de nuestras cosas, en cuanto las leyes no se opongan; ley 27 título 2, ley 1ª título 28 partida 3ª, y ley 10 título 33 partida 7ª.

Si pues la propiedad es el derecho de sacar de la cosa todos los frutos que puede

producir y todos los placeres que puede dar, haciendo de ella el mejor uso, de mudar su forma, enajenarla y hasta destruirla, en cuanto no se opongan las leyes; es decir, que protegida la propiedad por la ley civil, no ha de ser contraria á esa misma ley, ni debe perjudicar los derechos de los demás individuos de la sociedad; no se concibe como pueda una oficina, porque no admite una moneda que carece de título legal, una vez que ha mandado amortizarse, violar las garantías individuales del tenedor, cuando conserva en su poder su propiedad, y saca de ella los frutos que puede producir, como lo han hecho la mayor parte de los poseedores de esa moneda.

¿Cual es la invasion de facultades de que se acusa al gobierno del Estado, que previene á sus oficinas, no admitan una moneda provisionalmente emitida; esto es, que carece en concepto del mismo poder legislativo federal, que ha dispuesto su amortizacion, de las condiciones y requisitos indispensables?

Si quiere el tenedor de la moneda que intenta pagar con ella al Estado, ser indemnizado, en lugar de rehusar un pago legal que se le hace, dirijase al gobierno de la República, así como lo han hecho los demás tenedores, ó concurra á los romates ó almonedas públicas.

Si las leyes del Estado citadas, mandan que solo sea admitida una moneda que legalmente circula; está en su derecho, mas cuando los poseedores de ella han podido sacarle el fruto que produzca.

Puede decirse que es inmoral emitir legalmente una moneda y luego poner trabas para su libre circulacion; pero no hemos estado en este caso. En virtud de circunstancias especiales, se acuñó en el Estado una moneda llamada "Cuartillas" y su excesiva emision y falsificacion, hizo impracticable y perjudicial esa misma circulacion; resistiéndose á recibirla el comercio.

El ejecutivo de la Union tomando esas circunstancias en consideracion, dispone en

beneficio de todos y por causa de utilidad pública, cuya excepcion establece el mismo art. 27 de la Constitucion, el que sea amortizada la moneda de cobre, y habiéndose amortizado ya \$128, 3298 es., por esta Jefatura y por la Aduana marítima, se esta verificando la indemnizacion y en consecuencia ninguna garantía ha sido violada.

Haré presente para concluir, la razon poderosa que en otro caso semejante he dado ya, y es la siguiente:

Las circunstancias en que la Suprema Corte de Justicia ha tenido á bien resolver que se debe admitir la moneda de cobre, no existen ya cuando es un hecho evidente como acabo de manifestar, que no solo se ha decretado por el Congreso la amortizacion de dicha moneda, sino que casi está por concluirse la total indemnizacion, por lo cual no hay ya lugar á los juicios de amparo.

Habiendo desaparecido la causa, deben cesar tambien sus efectos, y siempre que se recurra á este arbitrio para eludir un pago, no debe ser aceptado, mas cuando se alegan como ejecutorias otras sentencias, para dejar de cumplir las providencias que las motivaron, lo cual es contrario á lo que dispone la ley de 20 de Enero de 1869, en su art. 26.

En razon á lo expuesto, el que hace las veces de promotor fiscal, pide:

Que no es de ampararse por la justicia federal al quejoso, una vez que, como he tratado de demostrar, no han sido violadas en su persona ninguna de las garantías individuales que otorga la Constitucion política de la República.

Se vuelven los autos dentro del término legal.

Mazatlan, Octubre 27 de 1874.—*Emiliano Busto.*

#### *Sentencia del O. Juez de Distrito.*

Mazatlan, Noviembre 4 de 1874.

Vistos.—Los Sres. Elorza y Mendía de

este comercio, se han presentado pidiendo amparo contra el ciudadano Recaudador ó Administrador de la Aduana terrestre de esta ciudad, que se niega á recibirles en moneda de cobre, la cantidad de..... \$157 50 es. que adeudan de la contribucion de giro mercantil correspondiente al último tercio del presente año; mas los recargos en que hayan incurrido por falta de oportunidad en el pago.

De autos consta (fojas 1, 5 y 6), que al ser requeridos de pago, fué cuando ofrecieron hacerlo en la moneda de cobre, y que el empleado coactor se negó á recibirla, porque la frac. 22 del art. 19 de la ley del Estado de 27 de Diciembre último, exige que se verifique en la de plata ó oro. De aqui resulta, que el pago que se trata de hacer en cobre, es \$196 95 es. que importa el citado tercio, y el seis por ciento de recargo por haber dado lugar al requerimiento, con arreglo á la frac. 19 del art. 39 de la ley del Estado de 12 de Noviembre de 1873, y que es cierto el hecho en que se funda la demanda, de haberse negado á recibir la moneda de cobre.

Considerando: que al Congreso de la Union está reservada la facultad de legislar sobre las condiciones de la moneda, entre las que se encuentran las reglas de su circulacion, (arts. 72 frac. 23 y 111 frac. 39 de la Constitucion); que la exclusion que hizo la citada ley del Estado de la moneda de cobre del pago de sus contribuciones, importa una limitacion de las de su circulacion, para lo que no tuvo facultades el Congreso de Sinaloa, por el hecho de estar encomendado al de la Union legislar sobre este punto (art. 117 de la misma).

Considerando: que la moneda de cobre de que aqui se trata, ha sido emitida bajo la garantía de que seria recibida, no solo por los particulares, sino tambien por las autoridades que le dieron curso legal y forzoso, entre las que se encuentran las del Estado, y que se privaria á los quejosos de tal garantía sin previa indemnizacion, si no

se les admitiera en pago, en el caso propuesto.

Con los fundamentos indicados y el que prestan los arts. 27, 101 fracc. 1ª y 3ª de la Constitución general é iguales fracciones del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869; se resuelve:

La Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Elorza y Mendiá, contra el acto del ciudadano administrador de la Aduana terrestre de este lugar, por el que se niega á recibirles en moneda de cobre la cantidad de \$166 95 ts. por el último tercio de este año de la contribucion de giro mercantil, y el seis por ciento de recargo que adeudan.

Hágase saber, publíquese la presente en uno de los periódicos de esta ciudad; remítase la copia respectiva al *Semanario Judicial* y los autos originales á la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales. El C. Lic. Joaquín García, 2º suplente del Juzgado de Distrito de Sinaloa, en ejercicio, definitivamente juzgando, así lo proveyó y firmó.—Doy fé.—Joaquín García.—Francisco Medina, secretario.

Es copia. Mazatlan, Noviembre 3 de 1874.—Francisco Medina, secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México Diciembre 22 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido por los Sres. Elorza y Mendiá del comercio de Mazatlan, ante el juzgado de Distrito de Sinaloa, contra el administrador de la aduana terrestre de Mazatlan que se niega á recibirles en moneda de cobre, el pago de ciertos derechos, con lo cual creen los promoventes invadida la esfera de la autoridad federal; visto el informe de la autoridad responsable, el parecer fiscal, y la sentencia del Juez de Distrito.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución, se declara: que es de con-

TOMO VII.—PARTE II.

firmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que amparó á los promoventes.

Devuélvase los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toen.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidentes y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—Ignacio M. Altamirano.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.

Certifico: que el C. Ministro Manuel de Castañeda y Nájera intervino en la votacion de este amparo, y que por haber fallecido antes de firmar la sentencia anterior, no aparece en ella su firma. México, Febrero 8 de 1875.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 8 de 1875.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

## AMPARO.

*Promovido por Joaquín Moreno ó Tomás Cuadros, ante el Juzgado 2º de Distrito de México, contra la sentencia del ciudadano gobernador del Distrito, que lo condena á la pena de muerte.*

### PEDIMENTO FISCAL.

C. Juez 2º de Distrito.

El promotor fiscal dice: que apesar de los esfuerzos, que con buena inteligencia ha he-